

Concepción, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece Rafael Torres Sandoval, abogado, Defensor Penal Público, en representación del imputado **Luis Eduardo Saldías Molina** en causa R.U.C. 2000414667-1 y R.I.T. 928-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Lota, e interpuso acción constitucional de amparo en favor de su representado, en contra de la resolución de 20 de mayo de 2021 de dicho tribunal, en virtud de la cual se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en forma anticipada en contra de su defendido.

Expuso, en síntesis, que el 20 de mayo de 2021 se celebró audiencia de revisión de medida cautelar, en la que el Ministerio Público solicitó se decretare la prisión preventiva de su representado. Hace presente que previamente, el 05 de mayo del presente, su defendido fue formalizado por dos delitos, un robo en lugar no habitado ocurrido el 19 de abril de 2020 y un robo en lugar habitado perpetrado el 17 de abril de 2020, ambos en calidad de autor presuntamente.

Dice que al discutirse la solicitud de medida cautelar la defensa efectuó las precisiones que indica latamente en su recurso. En definitiva, respecto de ambos hechos el defensor cuestionó el presupuesto material de la letra a) del artículo 140 del Código Procesal Penal, solicitando se rechazara la solicitud cautelar pedida por el Ministerio Público, la que, en su opinión, deviene en improcedente por los fundamentos que indica.

Agrega que la resolución del tribunal *a quo* al resolver acoger la petición de prisión preventiva, no fundamentó su resolución conforme a derecho, efectuando únicamente una adhesión a lo argumentado por el solicitante.

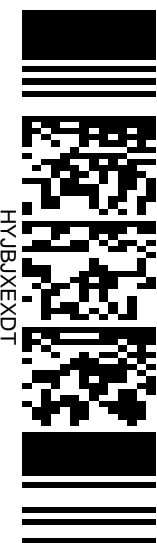
Luego de transcribir, parcialmente la resolución impugnada por esta vía, señala que erróneamente cree el tribunal *a quo* que lo solicitado es elevar el estándar cautelar al nivel de condena, no



obstante que lo que se pretende por el recurrente es que en su fundamentación se haga cargo de lo argumentado por esa defensa, más allá de simplemente "*estarse al ilícito por el cual fue formalizado el imputado*". En opinión del abogado recurrente, dicha resolución encubre una apariencia de fundamentación, cuyo objeto no es más que adherir a lo indicado por el Ministerio Público, contrario a lo que ha venido señalando la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y lo ordenado expresamente por el artículo 36 del Código Procesal Penal. Dice que el estarse únicamente a lo manifestado por una de las partes, sin atender u obviando derechamente los antecedentes de la causa, y que fueron expuestos en los argumentos de la defensa, siendo resumidos únicamente en considerarlos una cuestión de fondo, implica una omisión en la fundamentación exigida en la letra a) del artículo 140 del Código Procesal Penal.

Agrega que la resolución impugnada incumple el deber de fundamentación de las medidas cautelares personales exigido en los artículos 36, 122, 140 y 143 del Código Procesal Penal. Precisa que el artículo 36 de dicho texto legal obliga al tribunal a fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. Dicha fundamentación deberá expresar sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas.

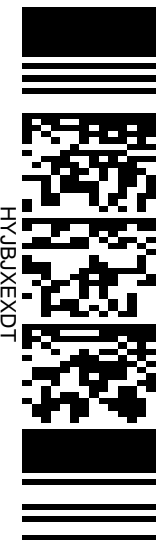
Añade que en el caso de autos, su defendido fue formalizado por dos hechos a los cuales se atribuyó una calificación jurídica que, conforme el criterio del tribunal, queda patente hasta la existencia de un juicio oral. Expresa que el estándar de convicción del artículo 140 que el tribunal refiere como inferior al de condena, se contrapone al estándar que el mismo tribunal le confiere a la formalización. Siendo impedido su defendido de su libertad personal producto de una resolución carente de motivación conforme a derecho, vulnera consecuentemente la garantía constitucional del debido proceso.



Concluye solicitando que se acoja esta acción constitucional, declarando la ilegalidad de esta resolución por contravenir la normativa legal vigente, *“tornando las condiciones de privación de libertad en una ilegal y arbitraria”*, solicitando ordenar como medida para restablecer el imperio del derecho, dejar sin efecto esa resolución y ordenar la libertad inmediata de su defendido.

Informó Cyndia Contreras Placencia, juez suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Lota, quien expresó, en síntesis, que en la oportunidad referida por el recurrente, se estimó procedente la medida cautelar personal de prisión preventiva a pesar de ser cuestionado por la defensa, considerándose que la norma del artículo 141 del Código Procesal Penal no prohíbe la prisión preventiva anticipada, sino que sólo regula una situación específica que es la improcedencia de la prisión preventiva en el caso de un imputado que se encuentre cumpliendo una condena de manera efectiva, y posibilita la prisión preventiva de forma anticipada en este caso. En la situación del imputado Saldías Molina, éste se encuentra en prisión preventiva en causa diversa de este mismo tribunal RIT 382-202 1.

En relación al planteamiento de la defensa en orden a que la resolución no se encontraría suficientemente fundada, hace presente que para tener por acreditados los presupuestos materiales se tuvo en consideración los antecedentes de los procedimientos policiales que fueron expuestos por el fiscal en la audiencia. Respecto del delito de robo en lugar habitado, éste ocurrió en horas de la noche encontrándose las víctimas en el mismo domicilio, el cual indicaron se encontraba cerrado, sorprendiendo al imputado, el cual se dio a la fuga, indicándose las especies que fueron sustraídas por parte de los afectados. Respecto del delito de robo en lugar no habitado, también se tuvo en consideración los antecedentes del procedimiento policial que fueron señalados por el ente persecutor en la audiencia, los que se estimaron suficientes para justificar la existencia de los delitos investigados. Respecto de la participación se consideró que en ambos

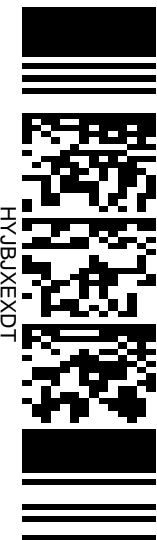


casos las víctimas reconocieron de forma inmediata al imputado por ser una persona conocida para ellas, además de los reconocimientos fotográficos efectuados en forma posterior.

Agrega que la defensa cuestionó la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público en la audiencia, estimando que no existían elementos suficientes para estimar la existencia de los delitos en referencia por los cuales se formalizó al imputado, sin embargo, el tribunal consideró que en la etapa procesal en que se encuentra la investigación, la que se mantiene con plazo de investigación vigente, los antecedentes resultan suficientes en relación a la formalización planteada por el Ministerio Público.

Luego, en relación a la necesidad de cautela, dice que estimó para acceder a la prisión preventiva que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerando que uno de los delitos por el cual fue formalizado el imputado tiene asignada pena de crimen, además que fue formalizado por dos delitos, y especialmente la existencia de procesos pendientes en su contra, toda vez que mantiene vigente causa de este mismo tribunal donde se encuentra formalizado por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones, además de condenas previas que constan en su extracto de filiación, cuestionando la defensa el tiempo transcurrido entre la denuncia y la formalización, elemento al que la norma del artículo 140 del Código Procesal no hace referencia.

Informó Enzo Osorio Salvo, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Coronel, quien señaló, en síntesis, luego de reseñar los hechos materia de investigación y por los cuales el amparado fue formalizado en su oportunidad, que la vía legal intentada por la defensa para controvertir la resolución del tribunal que ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva, no es la idónea para estos efectos. En efecto, la resolución que ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva ha sido decretada por un tribunal competente, en ejercicio



de sus facultades, por resolución fundada, habiendo oído previamente al ente persecutor y a la defensa del imputado, generándose el debate de rigor y teniendo finalmente el tribunal por acreditado los presupuestos legales para su dictación. A mayor abundamiento, la vía idónea para controvertir la existencia del hecho punible y participación del imputado en estos hechos formalizados resulta ser el recurso de apelación de la resolución que decreta la medida cautelar, camino que franquea el Código Procesal Penal.

Por las consideraciones anteriores, estima la Fiscalía que el juzgado de garantía no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna que pudiese justificar el amparo solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

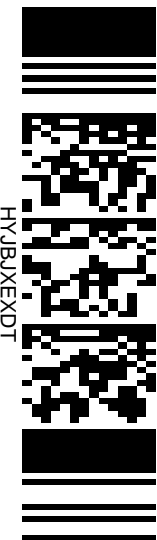
Con lo relacionado y considerando:

1º) Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Chile, el recurso de amparo es una acción que puede ser deducida a favor de toda persona que se hallare arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, para que se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual;

2º) Que, en el caso de que se trata, se ha interpuesto esta acción constitucional, pues la jueza suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Lota decretó la medida cautelar personal de prisión preventiva al amparado, sin que, en opinión de la recurrente, la resolución contenga los fundamentos suficientes para justificar dicha decisión;

3º) Que primero que todo debe decirse que la acción de amparo



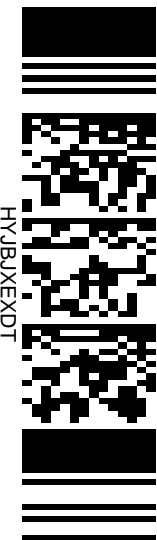
ha sido deducida en contra de una resolución que impuso la medida cautelar recién mencionada, la que no fue recurrida de apelación en su oportunidad por la defensa del amparado;

4º) Que sin perjuicio de lo anterior, estos sentenciadores no aprecian visos de arbitrariedad o ilegalidad en la decisión pronunciada por la jueza suplente del tribunal ya mencionado, concordando tanto en su fundamentación como en su mérito.

En efecto, el reproche de la recurrente en lo tocante a una supuesta falta de fundamentación de la resolución carece de asidero, lo que se constata de la sola lectura de la misma, cuyo texto fue acompañado por la ya referida magistrada al evacuar el informe que le fue solicitado.

Es cierto que el artículo 36 del Código Procesal Penal exige al tribunal fundamentar las resoluciones que dicte, pero el problema de la motivación de las sentencias no es un asunto que diga relación con la extensión o latitud de las mismas sino con su claridad y precisión. Lo que importa, a efectos de la motivación fáctica de las decisiones, no es la reproducción detallada de los elementos probatorios considerados a la hora de resolver, sino la justificación de la decisión, que debe estar basada en argumentos y razones jurídicamente atendibles, lo que es cumplido por la resolución recurrida de amparo.

En efecto, basta leer el texto completo de dicha resolución, no sólo transcripciones parciales como se hace en el recurso, para comprobar que ésta analiza cada una de las exigencias establecidas en el artículo 140 del Código Procesal Penal, cumpliendo así con el deber de fundamentación exigido por el artículo 36 de dicho texto legal. Es así como se refiere pormenorizadamente a los hechos materia de investigación y por los cuales el amparado fue formalizado en su oportunidad, refiriéndose asimismo a la necesidad de cautela. Cosa distinta es que el recurrente no esté de acuerdo o cuestione los argumentos y criterios del Ministerio Público, ponderados y acogidos en la resolución atacada, en el sentido que respecto estos hechos



formalizados se encuentra justificados la existencia del hecho punible y la participación, según los medios probatorios invocados;

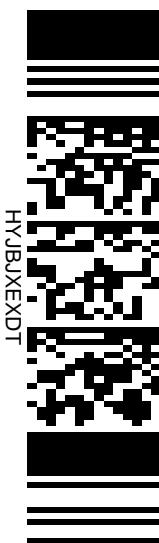
5°) Que, en consecuencia, la recurrida actuó dentro de la esfera de su competencia y en uso de sus facultades legales, sin afectar ilegal ni arbitrariamente, ya sea en grado de privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual del recurrente, lo que lleva a desestimar el recurso de amparo en análisis.

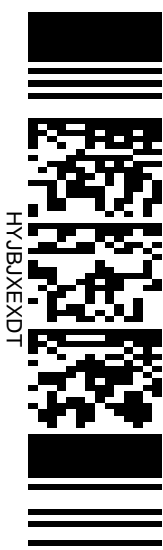
Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Amparo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de amparo interpuesto por el abogado Rafael Torres Sandoval, Defensor Penal Público, en representación del imputado **Luis Eduardo Saldías Molina** en causa R.U.C. 2000414667-1 y R.I.T. 928-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Lota, en contra de la resolución de 20 de mayo de 2021, pronunciada por la jueza suplente de dicho tribunal, Cyndia Contreras Placencia.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redactó el ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 199-2021.-





HYJBJXEXT

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G., Gonzalo Rojas M. y Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

